



Bibliophilus pover est.

IV Internacional
LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA



"Contra la derecha:
Unidad, luchar y no pactar."

INFORME POLITICO PRESENTADO AL CC. de 12-13 Mayo por el cda. Miguel Romero, en nombre de la Secretaría del CE.

Camaradas:

Prácticamente desde la constitución de este CC., nos hemos visto obligados a discutir "cabalgando" hechos políticos importantes, centrándonos en la coyuntura más inmediata y forzados a hacer hipótesis alternativas a corto plazo (p. ej. sobre los resultados de las Elecciones Generales), en vez de hacer debates sobre la situación política en profundidad. Esto es precisamente lo que debe hacer este CC, que ha contado con un tiempo razonable para reflexionar y no sufre la presión de acontecimientos inmediatos.

Cuando el CE, tituló su declaración de balance de las E.G. "*Cambiar el rumbo*", estas palabras significaban muchas cosas a la vez: la situación política había cambiado, la conclusión que tenían que sacar los trabajadores de la experiencia del "consenso", era la necesidad de un cambio radical en la orientación de su actividad; y en fin, nosotros mismos, la LCR, teníamos que sacar nuestro balance, enfocar la nueva situación cara a cara, definir con claridad cuáles eran las tareas en ella de un partido revolucionarios y qué debía cambiar en nuestros análisis políticos, nuestros métodos de intervención, nuestro funcionamiento, ... , para llevarlas a la práctica.

La tarea fundamental de éste y los próximos CCs. es justamente ir sentando las bases de "nuestro" cambio de rumbo: *empezar a renovar profundamente a la LCR*, desarrollando, y corrigiendo en lo que sea necesario, la tarea emprendida en el V Congreso. Por eso, Junto a este informe presentábamos un proyecto de resolución sobre nuestra intervención política y ambos textos son complementarios de los de balance y de organización, de forma que todos en su conjunto quieren empezar a dar una respuesta coherente a los nuevos problemas de la situación política y del partido.

A través de declaraciones y editoriales de COMBATE hemos ido analizando y dando respuestas tácticas a los sucesivos acontecimientos desde el referendun constitucional. No creemos que haya que hacer correcciones importantes, pero la primera parte del informe va a retomar nuestra interpretación de estos hechos, que constituyen los antecedentes, y contienen los datos, de la nueva situación política.

La segunda parte va a definir por qué es "nueva" la situación política: qué significa concretamente la *iniciativa política burguesa* y el "*giro a la derecha*" del gobierno; qué significa concretamente la *situación "a la defensiva"* del movimiento obrero; qué contradicciones y diferenciaciones fundamentales existen en ambos terrenos.

Finalmente, plantearemos el proyecto de resolución sobre la situación y las tareas que debemos asumir en la fase actual: cómo debemos llevar a la práctica nuestra política de FU e independencia de clase; qué política central debemos levantar frente al gobierno UCD; qué orientación contra la política de austeridad, respecto a la cuestión nacional, las libertades políticas, los nuevos Ayuntamientos y la intervención sectorial; en definitiva, cuál debe ser el marco general de trabajo del partido y con qué métodos lo vamos a realizar.

De este modo, el informe y el proyecto de resolución quieren servir no sólo para el CC, sino como marco de referencia de los debates en las próximas Conferencias y Congresos Nacionales del partido.

En vísperas del referendun constitucional, la situación política se caracterizaba por:

— la *agravación de la crisis de dirección política burguesa*, que se expresaba abiertamente como crisis institucional (agudización de las contradicciones internas en el Ejército y las FOP; deterioro de la autoridad del gobierno sobre sectores significa-

tivos de ambas instituciones); crisis de gobierno (la burguesía quería poner fin a la política de consenso y pasar a una política más ofensiva contra los trabajadores; la vía para conseguirlo, los objetivos políticos y económicos, a corto y medio plazo, ... , provocaban debates y diferenciaciones entre los distintos partidos burgueses, sin que la propia UCD diera una respuesta clara; enfin, la actitud de los trabajadores frente al gobierno era de creciente hostilidad); crisis de UCD (conflicto entre los distintos sectores que la componen; surgimiento de lo que, más adelante, sería "Coalición Democrática"; deterioro de las relaciones de UCD con los partidos burgueses nacionalistas, especialmente, el PNV...)

— los resultados contradictorios de la experiencia de veinte meses de "consenso" dentro del movimiento obrero; el balance negativo que el conjunto de los trabajadores ha realizado del pacto de la Moncloa se expresa en tres tipos de actitudes: la mayoría de los trabajadores se mantiene bajo control reformista, pero presiona a estas direcciones frente a las amenazas de repetición del "pacto social"; un sector amplio se encuentra desmoralizado, ha abandonado toda actividad política y sindical, o se limita al trabajo sindical en la empresa; otro sector ha roto con la política de las direcciones reformistas y se orienta hacia otras alternativas que aparecen a su izquierda: las luchas y experiencias electorales que vienen a continuación van a permitirnos analizar las diversas componentes de estos sectores.

La orientación política central que adoptó el partido en estas condiciones se ha confirmado como fundamentalmente correcta: utilizar como objetivo político central la "unidad para vencer al gobierno de UCD"; exigir la negociación inmediata de los convenios, frente a las maniobras patronales consentidas por las direcciones sindicales, y oponer la línea de "convenio-marco de mínimos" a cualquier clase de pacto; tratar de ganarse al ala "izquierda" del movimiento de masas para nuestra política de unidad e independencia de clase.

Este marco político de finales del año pasado ha ido modificándose a lo largo de los cinco meses pasados, especialmente a consecuencia del resultado de las EGs. Pero es importante recordar el proceso concreto, sus altibajos y contradicciones.

Es claro que el referendun constitucional ocupaba un lugar importantísimo para la UCD, como plataforma desde la cual empezar a superar la crisis política burguesa. Pero al resultado no respondió a sus previsiones. La aprobación de la Constitución era, sin duda, un triunfo político para la burguesía. Pero el alto grado de abstención y, fundamentalmente, los resultados de Euskadi significaban que la constitución "nacía débil" y que UCD no podía capitalizar en su favor el referendun.

Nuevamente se abre un fuerte debate sobre qué camino adoptar: pese a un error de pronóstico, de importancia secundaria, nuestra orientación se ha mostrado como la que convenía a los intereses de los trabajadores: emplazamiento al PSOE y al PCE de voto NO a la posible investidura de Suárez; exigencia de EMs. inmediatas y de EGs. en el mínimo plazo posterior insistencia aún mayor en la línea de "vencer a UCD".

Finalmente, Suárez zanjó el debate con una opción muy arriesgada, pero que le permitía intentar crear nuevas condiciones políticas para la resolución de la crisis: La opción tenía dos aspectos: la imposición de toques salariales por decreto-ley, complementada por otras medidas de "programa económico" que no ~~agradaban~~ los problemas fundamentales de la crisis económica, y el calendario político que conocemos, adelantando las EGs. a las EMs.

La respuesta que el desafío de los toques económicó en las direc-

ciens sindicales y en el movimiento obrero, tiene una particular importancia de cara al futuro y podemos resumirla así: se evanta una plataforma unitaria de CC.OO. y UGT, modesta en sus objetivos (limitación estricta al 16%; sin una posición de lucha de conjunto contra el paro, ni por las libertades y derechos sindicales...) y que, sobre todo, no va acompañada de las propuestas de vías de movilización y lucha que podían permitir imponerla; los trabajadores, alentados por la posición unitaria y enfrentada a la política gubernamental de sus direcciones mayoritarias, expresan una fuerte combatividad, aunque en general dentro de márgenes controlables por las direcciones mayoritarias (las excepciones más claras en este sentido, se encuentran en Euskadi): la masividad de las movilizaciones supera el gran nivel alcanzado en el primer semestre del 76, las direcciones sindicales se esfuerzan, y en la mayoría de los casos consiguen, evitar desbordamientos, se oponen frontalmente a la centralización de las luchas y rompen descaradamente luchas importantes (especialmente en servicios públicos: Telefónica, Renfe,...), tratando de reducir al mínimo la agitación social pre-eleitoral, aunque sin poder imponer una verdadera "tregua" los sectores de izquierda sindical tienen una importante actividad, cumplen en muchos casos un gran papel en el desarrollo de formas de lucha obrera directa (piquetes, asambleas de base...) pero aparecen dispersos de fábrica en fábrica sin coherencia y con poca capacidad para utilizar los focos de desbordamiento de las direcciones reformistas, ganarse a las nuevas capas de trabajadores surgidos en las luchas y ampliar su influencia en los sindicatos; en estas condiciones, se consigue de una forma generalizada hacer retroceder las posiciones provocativas de la patronal, pero los aumentos salariales logrados están, en general, dentro de los topes, que solo en sectores marginales, y en muchos ramos y fábricas grandes de Euskadi, se rompen claramente; no se consigue nada significativo ni respecto al paro, ni a los derechos sindicales; no tiene lugar la necesaria, y posible, reactivación de la vida sindical y reaparecen fenómenos de desafilación y desmoralización, en casos localizados, pero significativos (Metal de Vizcaya,...). El resultado global está pues muy lejos de la visión triunfalista que ofrecen las direcciones sindicales, pero la experiencia de lucha unitaria contra el gobierno y la patronal se ha saldado sin derrotas y es considerada, justamente, positiva por la mayoría de los trabajadores.

Esto no significa, de ninguna manera, que se haya conseguido romper ante la mayoría del movimiento obrero la dinámica del pacto social: hay que recordar que, más allá de la demagogia verbal, las direcciones de CC.OO. y UGT han seguido, y siguen defendiendo la necesidad de un "buen pacto" y el problema posiblemente reaparecerá en el próximo Septiembre, como veremos más adelante. Lo que sí podemos deducir como balance es que la voluntad de resistencia de los trabajadores en el terreno social se ha reafirmado, que las direcciones sindicales se han visto obligadas a ir, en muchos casos, más allá de donde hubieran querido (tanto en luchas concretas, como, por ejemplo, afirmando que las subidas salariales tienen que calcularse según el alza del coste de la vida del año anterior, en contradicción de hecho con lo que hicieron en el Pacto de la Moncloa y con una de las exigencias básicas de todo pacto social); y que muchos miles de trabajadores, de los cuales la inmensa mayoría no "ha roto el carnet", han empezado a comprobar el doble carácter que siempre tiene la unidad entre direcciones reformistas: por una parte, crea mejores condiciones objetivas para la movilización de masas; por otra parte, es utilizada por esas mismas direcciones para controlar, y cuando les resulta necesario, destrozar las luchas de los trabajadores. Este conjunto de experiencias tienen una importancia clave para definir nuestra táctica sindical de ahora en adelante.

Pero, como ya hemos dicho, el acontecimiento político fundamental de estos meses han sido las EGs. La victoria en ellas de la UCD tiene dos efectos políticos fundamentales: en primer lugar, sitúa a la burguesía en mejores condiciones para afrontar la crisis: UCD se vuelve a cohesionar internamente, se

reafirma como el partido burgués absolutamente hegemónico a escala estatal, cuenta con varias fórmulas de gobierno posibles, sin necesidad de recurrir a las coaliciones con la izquierda (que la burguesía no desea en absoluto, en la actual situación), fortalece su autoridad sobre el aparato de Estado y, en general, gana un importante margen de maniobra político; en segundo lugar, desaparecen a medio plazo las expectativas de cambio político global, de "vencer a UCD" en el terreno gubernamental. Este fortalecimiento de la burguesía le permite plantearse el llevar a la práctica esa política "más a la derecha", recurriendo a fórmulas de consenso sólo en casos imprescindibles (ejemplo, los estatutos de autonomía...).

No cabe duda pues, que las EGs suponen un retroceso, una derrota política importante para los trabajadores. Esto hay que decirlo, pero sería una simplificación caricaturesca no decir más que esto. Porque, en primer lugar, las EGs han vuelto a expresar prácticamente un equilibrio de votos entre lo que, en general, podemos llamar "derecha" e "izquierda": el movimiento obrero no ha sufrido en ellas una derrota aplastante, como los acontecimientos posteriores nos van a permitir comprobar; en segundo lugar, como señalamos en su momento, la victoria de UCD tenía "límites claros" respecto a la magnitud de los problemas que debía afrontar la burguesía: el más importante de estos límites, a corto plazo, era la crisis abierta del proyecto centralista de la burguesía y el aumento de sus dificultades para encontrar una salida a la cuestión nacional, especialmente en Euskadi; el que este hecho coincidiera con el retroceso o estancamiento de los partidos obreros en las nacionalidades es, sin duda, un problema muy grave para la clase obrera, pero no mejora en nada las posibilidades actuales del gobierno para resolver la cuestión nacional.

En definitiva, si la profundidad de la crisis burguesa se mide en kilómetros, el avance respecto a ella de la UCD se mide en metros. Como veremos al abordar las perspectivas de la actual situación, es fundamental tener en cuenta este hecho, no para despreciar la importancia de la victoria de UCD, pero sí para situarla en su justo lugar: para comprender, en definitiva, sus contradicciones y para saber situar la actual situación política dentro del período de crisis social global burguesa en que vivimos.

No tiene interés volver a analizar los resultados electorales con detalle (avances y retrocesos de los distintos partidos, abstención...): ya lo hicimos en la declaración del Comité Ejecutivo ("Cambiar el rumbo", Combate nº. 143). Pero sí debemos destacar los datos siguientes sobre el voto de izquierda: PSOE y PCE siguen siendo los partidos obreros abrumadoramente mayoritarios a escala estatal, sin que las relaciones de fuerzas entre ambos sufran cambios importantes: juntos recogen casi 7 millones y medio de votos; los votos de partidos obreros que aparecen a la izquierda del PCE y opuestos a la política de consenso (por más inconsecuente, y en determinados casos inexistente que sea esta oposición) suman más de 600.000 votos, lo cual es una primera muestra significativa de un fenómeno que sólo la LCR había previsto: el debilitamiento del "voto útil" respecto a las anteriores EGs y la existencia de una "izquierda" del movimiento de masas a la que había que tratar de dar una expresión política de unidad e independencia de clase en las elecciones; diversos partidos y coaliciones nacionalistas pequeño-burgueses, la mayoría de ellos de reciente creación, o en todo caso de muy escasa presencia política hace algunos meses, recogen cerca de 800.000 votos entre ellos HB, UPC y la suma del BNPG y UG quedan ampliamente por delante del PCE en sus respectivas nacionalidades; el significado político de estos votos va a ser sin duda uno de los temas más polémicos del CC, sobre todo en lo que se refiere al HB. Más adelante nos ocuparemos de caracterizar políticamente a HB y establecer cuál debe ser la orientación del partido hacia ella. Pero desde ahora tenemos que afirmar que estos votos significan un retroceso político de los partidos obreros en Euskadi, pero a la vez son, en general, la expresión política del rechazo de sectores obreros y pequeño-burgueses

hacia aspectos muy diversos de la política de consenso. El que este rechazo haya sido capitalizado por direcciones pequeño-burguesas (por otra parte, muy diferentes entre sí), constituye sin duda un grave problema político, particularmente para un partido obrero revolucionario como el nuestro, cuya tarea consiste precisamente en protagonizar y dirigir ese rechazo con un programa de clase. La base misma para que podamos resolver el problema es que comprendamos que estamos ante un proceso de radicalización política gravemente desorientado, y no, como decía cínicamente Lertxundi refiriéndose a HB en su artículo de COMBATE, ante una corriente "que se sitúa política e ideológicamente en el terreno del nacionalismo más tradicional".

En fin, el largo periodo electoral se ha cerrado con la primera victoria política lograda por la izquierda desde la amnistía del 77: el 70% de la población del país, la inmensa mayoría de las ciudades de más de 100.000 habitantes, van a tener gobiernos municipales de izquierda. La importancia del hecho es clara, pero es necesario precisarla para evitar toda visión de las Elecciones Municipales (EMs) como "segunda vuelta" de las EGs.

Los efectos positivos son muy evidentes: por fin se ha conseguido acabar con uno de los restos institucionales del franquismo; la victoria de la izquierda ha generado inmediatamente una fortísima dinámica unitaria entre los trabajadores, que va a ser uno de los datos políticos más importantes del próximo periodo (lo cual, dicho sea entre paréntesis no constituye ninguna sorpresa para nosotros); este triunfo fortalece al movimiento obrero que estaba muy necesitado de "inyecciones" como ésta; en fin, las EMs son una primera y clara comprobación práctica de lo que habíamos llamado los "límites" de la victoria de UCD y las posibilidades existentes de organizar la resistencia obrera frente a ella. Pero, como es evidente, en las EMs no se juega el gobierno del país, ni ninguna clase de "contrapoder". El poder está en manos de UCD que ha reaccionado inmediatamente poniendo en marcha un cerco legal e institucional (más adelante vendrá el "cerco económico") sobre los recién nacidos Ayuntamientos de izquierda. Y, por otra parte, las direcciones del PSOE y el PCE no tienen la menor intención, como repiten todos los días, de dar la batalla al gobierno desde los Ayuntamientos: los riesgos de que victoria conseguida se desperdicie, son pues evidentes. La victoria de la izquierda en las EMs ha mejorado las condiciones objetivas y subjetivas del movimiento obrero para resistir a la ofensiva de la derecha ni más ni menos.

Formalmente, la proclamación del nuevo gobierno ha cerrado estos cinco meses de importante hechos y cambios políticos. Su composición responde claramente tanto a la voluntad de hacer una política "más a la derecha", como a la inseguridad y las vacilaciones de UCD sobre cómo llevar adelante en la práctica esa política. Los tres puntales sobre los que parece asentarse el gobierno son: Gutiérrez Mellado, encargado de la reforma militar y del aparato represivo, y de la máxima potenciación de las FOP, que aparecen expresamente respaldadas por el Ejército; Fontán, encargado de lograr la reforma por consenso de los actuales proyectos estatutarios y el cerco legal a los Ayuntamientos de izquierda: a través de él se tratará de ir avanzando en lo que hemos llamado "dirección política colegiada" de UCD con PNV y CiU; Abril Martorell, encargado de poner en marcha la "reforma económica" en su doble aspecto: programa económico a medio plazo y legislación laboral y sindical. El resto del gobierno son peones intercambiables, a los que Suárez puede pegar la patada, sin mayores problemas. Este es el gobierno que va a tratar de sacarle el jugo, hasta la última gota, a la victoria electoral del 1-M, en los dos problemas centrales del futuro inmediato: la crisis económica y la cuestión nacional.

II. LA SITUACION

1. Objetivos y contradicciones de la política burguesa

Teóricamente, la burguesía dispone de cuatro años para dirigir la política del país a través de su partido hegemónico, la UCD. Cuenta con una posición parlamentaria confortable, el PSOE se ha apresurado a declarar que respetará el plazo de legislatura como "leal oposición". El PCE se limita a reclamar de UCD el retorno al consenso. La iniciativa política burguesa no está amenazada: hará falta un largo periodo de desgaste para que la crisis de dirección política vuelva a aparecer a plena luz; hará falta también un fortalecimiento y recomposición del movimiento de masas, en primer lugar de los sindicatos obreros para que cuando eso ocurra, los trabajadores puedan utilizarlo en su favor; para que no se repita, en condiciones peores, el 1-M.

La burguesía se va a ver obligada a utilizar esta iniciativa para gestionar la crisis social del país, mas que darle una solución radical. La victoria electoral de UCD no ha modificado las relaciones de fuerzas entre las clases, ni, como dijimos anteriormente, ha permitido un avance proporcional a la gravedad de la crisis. Podemos comprobarlo en los terrenos político y económico.

La actual situación económica se caracteriza esquemáticamente así:

- el nivel de producción está creciendo muy moderadamente, sin que pueda hablarse de un proceso acumulativo de recuperación económica, ni siquiera en su fase inicial;
- desde Noviembre, han reaparecido las tensiones inflacionistas: es muy poco probable que las previsiones del gobierno se cumplan y lo normal será que la inflación esté 2 ó 3 puntos por encima de la prevista;
- el componente más dinámico de la demanda han sido las exportaciones, sin que el consumo privado haya experimentado un crecimiento importante;
- el paro sigue creciendo de un modo continuo, tanto en lo que se refiere a la caída del empleo, como por la disminución de la tasa de actividad (es decir, por la no absorción de los jóvenes que alcanzan la edad de trabajar);
- la política de topes salariales ha tenido efectos importantes: si le añadimos otros factores (crecimiento de la producción, mayor inflación de la utilizada para establecer los topes...), es claro que se va a producir este año una redistribución de la renta en favor de la burguesía, similar en su alcance a la del año pasado; esto no significa que se haya producido una recuperación de los beneficios capitalistas susceptible de impulsar una reactivación de la inversión;
- la política monetaria, pese a los zig-zags que la han venido caracterizando, tiende claramente a facilitar la expansión del crédito interior, respondiendo así a las presiones patronales;
- las partidas para inversión pública se mantienen débiles en el proyecto de presupuestos del 79, aunque se trata de utilizarlas al máximo en el periodo inmediato (p. ej. los planes anunciados por Sancho Rof en construcción de viviendas, siempre que se llevan a la práctica...);
- en fin, las reestructuraciones de sectores siguen la tónica de "medias tintas": se trata de conseguir suavemente los objetivos de la burguesía, a través de medidas parciales, pero sin afrontar a fondo los problemas de ningún sector.

No existe, en definitiva, una tendencia clara de superación de la crisis, pero existe una mejora relativa, y desigual en los diversos sectores, de la situación económica de la burguesía.

En estas condiciones, el nuevo gobierno a la vez que se reafirmaba en el programa económico de Diciembre, lo ha complementado con una serie de medidas coyunturales destinadas a permitir una cierta ampliación del crédito interior a medio plazo; evitar a todo precio una renegociación de convenios y.

por tanto, garantizar que la inflación estará por debajo del 6,5% en Junio; ampliar la liberalización del comercio exterior. Sin entrar en el análisis detallado de estas medidas, bastante contradictorias y cuya valoración requiere datos de los que todavía no se dispone, es claro que en su conjunto pretenden sobre todo ganar tiempo para la reorientación de política económica, que inevitablemente tendrán que plantearse tarde o temprano.

Lo que podríamos llamar el "programa de la patronal" está muy claro: el problema fundamental es lo que ellos llaman demagógicamente "inflación de costes" y que significa, hablando en plata, que los salarios son "demasiado altos": en consecuencia, proponen un "nuevo marco de relaciones laborales" (es decir, ataques a la libertad sindical, reglamentación dura del derecho de huelga, introducción clara de la "flexibilización de plantillas", etc.) y *mantener la política de topes salariales* (con cuyos resultados, en realidad, se sienten bastante satisfechos); además, *reducir drásticamente el gasto público* (con las consecuencias inevitables que esto supone en los servicios sociales "no rentables"); *abordar a fondo la reestructuración de los sectores en crisis*, no mediante medidas de nacionalización, sino mediante crédito barato al capital privado nacional e internacional; *seguir progresando en la apertura del mercado al imperialismo*; dejar el problema de paro a merced de la supuesta "reactivación". Este conjunto de medidas fundamentales sería el contenido del llamado "programa a medio plazo" entre 2 y cuatro años, que la patronal dice que *desea pactar* con las direcciones obreras reformistas. Cuentan para ello *no con hacer grandes concesiones, ni contrapartidas*, sino con utilizar la victoria electoral de UCD y el relativo debilitamiento de los sindicatos (que la patronal acostumbra a destacar y exagerar, incluso en términos cuantitativos: el discurso de Ferrer ante la Trilateral daba como tasa de afiliación sindical el 17%, lo que está muy por debajo de la realidad). Y cuentan, por supuesto, con que las direcciones reformistas están, en principio, dispuestas para un nuevo pacto social (máxime cuando no existen a medio plazo posibilidades de EGs) a cambio evidentemente de las contrapartidas mínimas que les permitan "justificar" el pacto ante los trabajadores.

No podemos prever si va a haber o no pacto social; sí podemos afirmar que el margen de concesión por parte del gobierno y la patronal será muy reducido y que, de no haberlo, el gobierno se verá obligado a lanzar otro programa a un año vista y volver a intentar la mejora de relaciones de fuerzas que le permita poner en pie el "programa a medio plazo" (en este intento ocupará un lugar central la imposición de una legislación laboral y sindical a la medida de la patronal). Hay que tener presentes los riesgos que presenta para la burguesía continuar con la política económica "a corto plazo", aunque consiga victorias parciales, no sólo por razones internas, sino por la coyuntura internacional (para cuya caracterización nos remitimos al n.º 1 de la edición en castellano de INPRECOR) y por la necesidad de avanzar en la preparación de la entrada en la CEE.

En estas condiciones, ¿qué va a significar en concreto la iniciativa política burguesa? ¿Cuáles son sus principales contradicciones y objetivos?

El primer dato a considerar es las relaciones de fuerzas políticas dentro de la burguesía. Como hemos dicho anteriormente, la hegemonía de UCD a escala estatal es absoluta; CD es simplemente su apéndice, sin apenas identidad política propia. A corto plazo, esta situación refuerza la homogeneidad política burguesa y ha situado en segundo plano las contradicciones internas de la propia UCD. Pero a largo plazo, se plantean serios problemas para la burguesía, que han empezado a manifestarse en las EMs: por una parte, UCD por sí sola no recoge toda la base social que se reconoce en la derecha reaccionaria; por otra parte, UCD va a reflejar en su interior todas las contradicciones políticas burguesas, sin contar con la "colchoneta" que en el anterior parlamento representaba AP; en fin, esta situación ayuda a desenmascarar la demagogia de UCD como partido "de centro". El resurgimiento de un partido "tipo CD"

va a depender, evidentemente, de la evolución de la situación política, pero es una posibilidad con la que hay que contar.

El crecimiento electoral y, sobre todo, el incremento de la actividad de los fascistas es otro dato de considerable importancia. Como cabía esperar, la llegada al Parlamento de Blas Piñas no ha hecho disminuir, sino por el contrario, ha multiplicado los atentados y crímenes de las diversas bandas fascistas, más o menos legales, más o menos para-policiales. Lo que menos importa es si las bandas actúan bajo las órdenes directas y de un modo conscientemente coordinado con los partidos fascistas de UN: lo importante es que se trata de dos terrenos de una misma "estrategia de tensión", cuya tendencia no es a desaparecer, sino a crecer, acunada por la ineficacia de la represión gubernamental (que se debe no a la "mala voluntad", o a la "torpeza técnica" del gobierno, sino a las características del aparato represivo y a las bases de apoyo con que cuentan los fascistas en él) y por la cobardía y la impotencia de las direcciones reformistas.

Pero el problema más importante, en lo que se refiere a las relaciones de fuerzas interburguesas, está en la posición minoritaria de UCD en Catalunya y Euskadi con respecto a CiU y al PNV. Después del 1-M es claro que la dirección política burguesa tiene que ser "colegiada": UCD tiene que alcanzar un compromiso con ambos partidos, cuyo marco político serán los estatutos. (Es significativo que un representante tan autorizado del gran capital, y uno de sus "delegados" en la Trilateral, como Claudio Boada, haya planteado que la solución del problema de la siderurgia vasca debe quedar en manos del CGV, es decir del PNV). La burguesía ha decidido que, en las circunstancias actuales, tiene que apostar por el PNV como su partido dirigente en Euskadi. La situación no es, ciertamente, comparable en Catalunya, entre otras razones porque allí existe una mayoría electoral obrera; pero aunque la táctica sea diferente, la conclusión es idéntica: el partido burgués dirigente allí no es UCD, sino CiU y hace falta un compromiso entre ambos. Evidentemente, estos compromisos tienen que basarse en el reconocimiento por parte de UCD de un considerable margen de autonomía a sus aliados, que les permita seguir apareciendo como "partidos nacionales". Por otra parte, PNV y CiU representan a fracciones específicas de la burguesía: se trata pues de una "alianza conflictiva", especialmente en el caso del PNV, pero imprescindible para la dirección política burguesa.

Este es sólo un aspecto del problema político fundamental de los próximos meses y el actual "estabón más débil" de toda la política burguesa: la búsqueda de una salida a la cuestión nacional, en general, y Euskadi, en particular.

Porque, de hecho, Euskadi va a ser el "banco de pruebas" de todo el proceso estatutario. A pesar de las características muy específicas de la situación vasca —no sólo en el terreno directamente político, sino también, como hemos señalado antes, en el terreno de las luchas sindicales—, a pesar, en fin, de que "Euskadi sea más que nunca la excepción", es muy probable que el "techo" del estatuto vasco marque, a más o menos corto plazo, las exigencias de otras nacionalidades. Los intentos del gobierno para tratar de que el "techo" estatutario lo señalara el estatuto catalán, menos conflictivo, no tienen porvenir. El gobierno tiene que jugar directamente el pacto con el PNV, cuya voluntad negociadora es clara, pero que recibe con mucha intensidad la presión del nacionalismo radical.

Es evidente que el gobierno no está en condiciones de imponer un estatuto sin consenso; digamos, sería para él un riesgo suicida que la posición del PNV fuera similar —"abstención"— a la del referéndum constitucional. El compromiso es inevitable, pero a costa de una negociación probablemente muy conflictiva, de concesiones importante por parte del gobierno (lo que es lo mismo, sin grandes cambios sobre el actual proyecto) que probablemente provoquen tensiones interburguesas y dentro del aparato de Estado. Y aún en estas condiciones, por una parte, quedará pendiente la cuestión explosiva de Navarra, y por otra parte, un sector significativo del pueblo vasco, en el

que ocupará un lugar de vanguardia LKI, rechazará el consenso estatutario. Sin hacer comparaciones mecánicas, es claro que ese foco de rechazo va a tener una influencia en otras nacionalidades, aunque inicialmente sólo pueda esperarse en ellas un rechazo muy minoritario al estatuto respectivo (Cataluña...); además, los conflictos de la próxima negociación estatutaria van igualmente a influir en las nacionalidades y regiones que todavía están iniciando el proceso de elaboración del estatuto.

La aprobación de los estatutos catalán y vasco no va pues, a resolver la cuestión nacional en nuestro país, pero va a cambiar profundamente las condiciones políticas en que ésta se expresará. En la hipótesis más optimista para la burguesía, el marco general del problema incluirá: -ese "foco" de rechazo, que tendrá carácter de masas, y la cuestión navarra, en Euzkadi; -una muy amplia aceptación del estatuto en Cataluña, donde habrá que hacer la experiencia de que el estatuto no significa el autogobierno; -una situación previsiblemente conflictiva en otras nacionalidades y regiones (sobre todo, Canarias, pero también Galicia, Andalucía...).

La burguesía española necesita mantener un alto grado de centralización en el aparato de coerción (Ejército, policía, tribunales, cárceles) y exige una renuncia explícita a cualquier afirmación práctica de soberanía nacional; no puede admitir, en definitiva, ninguna clase de "autogobierno", sino simplemente la colaboración con el gobierno central, y bajo la dirección indiscutida de ésta, en la realización de la política burguesa (de esa política "más a la derecha" que es hoy la de la burguesía española). En este sentido, la burguesía española no tiene solución a la opresión nacional, no sólo desde un punto de vista histórico sino en términos de política actual. Existen pues las condiciones objetivas para que, de un modo desigual, se mantenga la lucha de sectores de masas por la soberanía nacional. Para la clase obrera es un problema de la máxima importancia ser capaz de dirigirla; es también uno de los "bancos de prueba" fundamentales donde los trabajadores tienen que demostrar su capacidad para dirigir la lucha por la Revolución Socialista en el Estado español. Y para que la clase obrera reconquiste la dirección de esta lucha allí donde la ha perdido, sobre todo en Euzkadi, y para que pueda ejercerla de verdad, y no perder lo conseguido hasta ahora, allí donde existe una mayoría obrera reformista, sobre todo en Cataluña, la condición es que avance la construcción del Partido Revolucionario, que se fortalezca la LCR. Esto no es un lema de "propaganda general"; es una de las tesis políticas esenciales para comprender nuestras propias responsabilidades y el sentido de nuestra actividad.

Junto al problema nacional, la burguesía debe afrontar seis tipos de problemas políticos más. Es importante tenerlos en cuenta porque en ellos se van a librar batallas parciales, que van a influir en la movilización de masas y en la evolución de la situación política.

- el primero es el problema de la represión. Desde hace meses estamos comprobando su agravación, en el plano legal y en acciones concretas: esta línea va a proseguir en el futuro, coherentemente con la política "más a la derecha" del gobierno y con la misma composición de éste. Hay que tener en cuenta que se va a tratar de ejercer la represión no solamente contra los "terroristas", sino que es probable que se den pasos adelante y se ejerza represión contra toda clase de revolucionarios y luchadores del movimiento (desde la represión de piquetes hasta versiones españolas del "caso Negro") y que las mismas acciones de masas, incluyendo las legales, sufrirán represión, como ya está sucediendo. Todo esto va a darse en el marco de pacto que parece haberse establecido entre el ala más reaccionaria de la jerarquía militar y el gobierno, que busca evitar las contradicciones abiertas que surgieron en el pasado mes de Noviembre (particularmente peligrosas ante la problemática estatutaria y la prevista distribución de competencias en materia de Orden Público, así como tras la victoria de la izquierda en las EMs; en este sentido, la rapidez con que el gobierno ha reaccionado vaciando de toda competencia a los

Ayuntamientos, demuestra su preocupación por el tema). Que el pacto se consolide o no, y por consiguiente que se realice o no de un modo satisfactorio para la burguesía la reforma militar y policial, depende evidentemente de la resistencia que esta escalada represiva encuentre en el movimiento de masas. La opción más probable, es la reaparición de conflictos abiertos, cuya importancia va a depender de la causa que los provoque (p. internacionales: África, problemas con estatutos, luchas de masas, etc.) y del marco político general en que se den.

- el segundo es la actividad terrorista contra el aparato de Estado, en general, y el problema de ETA en particular. Hay que diferenciar con claridad dos niveles en este problema: a escala estatal, y salvo que fuera víctima de un atentado algún personaje clave, el gobierno domina el problema y lo utiliza para legitimar su escalada represiva y, con la colaboración de las direcciones reformistas, beneficiarse del clima de "unidad nacional antiterrorista"; en Euzkadi el problema es radicalmente diferente porque el terrorismo cuenta con una amplia base de masas: la táctica de la burguesía consiste aquí en combinar el aislamiento político con la represión. Es poco probable que esa tarea de aislamiento político, cuyo protagonismo se encomienda al PNV, con la colaboración de PSOE y PCE, tenga éxito, dada la política general que cabe esperar del gobierno UCD y el tipo de estatuto de consenso que va a ponerse en pie.

- el tercero es el problema fascista, al que nos hemos referido antes. Evidentemente, lo que preocupa a la burguesía de la actividad fascista es, esencialmente, las reacciones que puede provocar, que ya está provocando en el movimiento de masas. Hay que repetir que no se trata de que el gobierno no quiera terminar con la actividad fascista incontrolada: es que no puede hacerlo. En cuanto a la actividad fascista para-policial "controlada", forma parte de los métodos habituales de la policía (grupos tipo ATE, etc.).

- el cuarto engloba al conjunto de leyes de desarrollo constitucional que van a ir afectando a sectores e instituciones concretas y van a originar por ello mismo conflictos, e incluso movilizaciones de masas sectoriales, características del periodo inmediato. El gobierno tiene que completar en los próximos meses los problemas "aplazados" de reorganización de la enseñanza, del plan energético nacional, legislación sobre el divorcio (y tratar de evitar cualquier planteamiento sobre el aborto), reorganización del aparato judicial, reforma sanitaria, etc. Además, por supuesto, de las leyes laborales a que nos hemos referido antes y de la legislación de régimen local, a que nos referiremos inmediatamente. En todos estos aspectos va a reflejarse esa política "más a la derecha": la burguesía necesita rentabilizar su victoria electoral, para poner en pie un aparato de Estado y unas instituciones coherentes, con la máxima adhesión social posible, pero con las peores características del "Estado fuerte".

- el quinto es el problema municipal. El cerco sobre los Ayuntamientos de izquierda de que ya hemos hablado, se va a complementar con la actividad capitalista directa frente a ellos ("huelga de inversiones" o exigencia de garantías de beneficios). Se trata pues de hacer de los Ayuntamientos órganos de gestión subordinada del aparato de Estado, respetuosos de las jerarquías estatales superiores. De esta forma se busca desgastar la victoria de la izquierda y utilizar los ayuntamientos dirigidos por ella para legitimar el sistema y amortiguar en el escalón más bajo las reivindicaciones sociales de los trabajadores y el pueblo. Ciertamente, el gobierno, y por supuesto las direcciones reformistas, quieren evitar un choque frontal entre instituciones: lo que busca es un compromiso bajo la batuta gubernamental.

- en fin, el sexto problema es la incorporación decidida del Estado español a la OTAN y a la CEE y hacerse cargo de las tareas que ahora mismo le corresponden en el sistema imperialista (en este sentido, la incorporación de 13 destacados portavoces políticos y económicos del gran capital español a la Trilateral -con las notables ausencias de miembros del PNV y también

con la ausencia del PSOE, pese a las invitaciones recibidas y a que numerosos representantes de la socialdemocracia internacional forman parte de la comisión, es un dato muy significativo).

En lo inmediato, los problemas más graves están en el triángulo Canarias-Sahara-Norte de África. El último giro de la diplomacia española ha vuelto a poner de actualidad candente, en particular, los problemas de las plazas coloniales de Ceuta y Melilla, cuyo inevitable proceso de descolonización va a ser foco de conflictos potencialmente muy graves y con directa influencia en el Ejército.

Este es el conjunto de problemas en que va a desarrollarse el futuro de la situación política, donde va a ponerse a prueba el margen de maniobra ganado por la burguesía. Lo fundamental es situar estos problemas en las condiciones de equilibrio entre clases existentes en la sociedad española. Lograr los objetivos políticos y económicos de la burguesía exigirá ahora un choque frontal con los trabajadores; las relaciones de fuerzas lo impiden y obligan a la burguesía a una táctica de desgaste, combinando ataques directos a los trabajadores y compromisos con las direcciones mayoritarias, tratando en todo caso de evitar que se fortalezca la dinámica unitaria hoy existente, y más aún, que pueda escapar al control reformista.

El movimiento de masas, ante una "resistencia prolongada"

El movimiento obrero ha atravesado uno de los periodos más difíciles de los últimos años, marcado por una serie de derrotas parciales, que se inician en el Pacto de la Moncloa y sólo se quiebra en las EMs. Afirmar que está "a la defensiva" es repetir lo que venimos diciendo desde hace muchos meses. Tenemos que concretar los cambios que se han producido en esa "defensiva"; para en base a ellos definir nuestra táctica. Los más importantes de estos cambios son los siguientes:

1- *La acentuación de los problemas estructurales ligados a la crisis económica:* aumento del paro (con sus consecuencias de debilitamiento estructural de la clase obrera; marginación social de capas de población, particularmente juveniles,...); descenso del nivel de vida del conjunto de los trabajadores (por segundo año consecutivo aumenta la participación de los beneficios en la renta nacional); riesgos de división entre las capas relativamente privilegiadas de los trabajadores y las menos favorecidas (instrumentalizado por los reformistas, entre otros terrenos, para utilizar demagógicamente la batalla contra el "corporativismo" en favor de políticas de colaboración de clases: p. ej. la forma de conseguir nuevos puestos de trabajo es que los que trabajan acepten reducciones drásticas de sus salarios,...).

2- *Debilitamiento de la afiliación y la actividad sindical* (la tasa de sindicación debe andar por el 25%, lo que es bajo respecto, incluso al nivel europeo, y a las cifras de hace un par de años, pero sobre todo es una cifra muy reducida si se la compara con el nivel de participación en las movilizaciones de los pasados convenios). Este debilitamiento es uno de los aspectos centrales de lo que hemos llamado la "factura del consenso", aunque esté ligado también a las dificultades materiales de los sindicatos y a las restricciones de derechos que sufren (a la "utilidad" de los sindicatos en la empresa y en la prestación de servicios) y a las condiciones generales de la nueva situación política. Las direcciones sindicales mayoritarias se esfuerzan por aumentar su control sobre los respectivos aparatos, a la vez que se desarrollan diferenciaciones de alguna importancia en su interior, con la aparición de "alas izquierdas" de la burocracia que de hecho sirven de cobertura a la política de las direcciones. Como ya se demostró en la negociación de los topes, estas direcciones se ven obligadas a una política más beligerante frente al gobierno y a la patronal; como también se ha demos-

trado, este "giro" queda muy lejos de las necesidades de los trabajadores. Por otra parte, los sindicatos mayoritarios siguen siendo utilizados al servicio de las políticas de sus respectivos partidos hegemónicos, lo que significa que "intervienen" en política en la medida que les interesa a estas direcciones que lo hagan y en apoyo de ellas, manteniéndose como regla general la división de funciones entre "la política que se hace en el Parlamento, y a partir de ahora en su nivel, en los Ayuntamientos" y "la función de presión-apoyo de los sindicatos". Se ha producido un ascenso de los sindicatos nacionalistas, correspondiente al ascenso de las corrientes nacionalistas radicales en Euskadi, Canarias y Galicia, y debido a las mismas causas: la política nefasta de las direcciones sindicales mayoritarias y su incapacidad para dar una respuesta a la opresión nacional. En fin, la izquierda sindical se encuentra en condiciones de dispersión extrema, que les impiden aparecer como una alternativa a las direcciones mayoritarias, utilizar el desgaste que éstas han sufrido ante sectores sindicales combativos y, ganárselos. Evidentemente, dentro de esta "izquierda sindical" existen niveles de conciencia muy diversos: en el último período se ha desarrollado una capa "sindicalista de empresa", que expresa una forma de rechazo a la política reformista con riesgos evidentes, teniendo en cuenta que en los próximos meses el movimiento obrero debe abordar una serie de importantísimas batallas de conjunto (leyes sindicales, plan económico,...), que no se puede ganar la batalla a las direcciones sindicales empresa a empresa y que, es necesario que la izquierda sindical luche para que los sindicatos adopten posiciones claras y de lucha en todos los terrenos políticos y sociales.

3- *Los movimientos de carácter sectorial se encuentran en situaciones muy diversas, pero en general marcados por un debilitamiento del peso en ellos de los partidos obreros.* El gobierno está consiguiendo evitar movilizaciones campesinas, a base de políticas de precios y sobre todo de la gran cosecha del año pasado, pero está dejando de lado, no solamente los problemas estructurales del campo español, sino los más inmediatos que se derivan del paro jornalero y la preparación de la entrada en la CEE. Los movimientos contra la opresión nacional, están bien bajo dirección obrera reformista (Catalunya), o bajo direcciones burguesas (Euskadi) o pequeño burguesas (Galicia, Canarias,...): no hay que decir los problemas de división entre los trabajadores y los sectores populares, dentro de cada nacionalidad y a escala de Estado, que se derivan de ello, y qué con tanta hostilidad instrumentaliza la burguesía. Tenemos que insistir en lo dicho anteriormente, esta situación sólo podrá modificarse con la aparición de una alternativa obrera revolucionaria suficientemente fuerte: es decir con el desarrollo de la LCR en las respectivas nacionalidades. No cabe esperar, en absoluto, que las direcciones reformistas den, bajo la sola presión objetiva de las masas, el cambio radical de contenido a su política en las nacionalidades, capaz de recuperar para la clase obrera el papel dirigente en estas luchas. El movimiento de la mujer, no ha experimentado un gran desarrollo pero mantiene una actividad importante y un peso social creciente: en el último período han crecido las posiciones "radicales" en su interior, lo que plantea riesgos de división importantes, de enfrentamiento movimiento de la mujer-movimiento obrero. Afortunadamente, también hay que registrar avances significativos del trabajo mujer en los sindicatos: ahí está la base para superar los rasgos anteriores. El surgimiento con mucha fuerza del movimiento ecológico, en el que existe una importante componente juvenil, se está realizando también sin un peso dirigente de los partidos obreros en su interior. La situación es distinta afortunadamente, tanto en la recomposición de las AIVs, consecutiva a la victoria de la izquierda en las EMs, y en los movimientos juveniles que se desarrollan en el sector de la enseñanza. Aún en estos casos los riesgos permanecen: si hay hegemonía indiscutida de los partidos obreros reformistas, es decir, si los revolucionarios no somos capaces de hacer aparecer y actuar una alternativa clara, aún minoritaria, estos movimientos seguirán un camino similar a los anteriores.

4- El fenómeno de la abstención política ha sido creciente y ha terminado alcanzando niveles espectaculares: más de ocho millones y medio de abstenciones el 1-M; cerca de 10 millones el 3-A. Una parte reducida de este fenómeno expresa una forma de crítica de sectores obreros y populares, y en especial jóvenes, a la política reformista. Pero en general esta situación significa la inactividad, la apatía, el escepticismo político de capas muy amplias de la población. Aunque en el caso del 3-A haya sido la derecha la principal perjudicada por el abstencionismo, el problema debe preocupar sobre todo al movimiento obrero que puede y debe ganarse a la mayor parte de este amplísimo sector.

5- El pacto municipal PSOE-PCE es una dato nuevo de gran importancia, más allá del terreno municipal mismo. Es un reflejo de la presión unitaria existente entre los trabajadores, que tuvo por fin, ocasión de expresarse tras el refuerzo moral que supuso la victoria de la izquierda en las EMs. Esta presión contiene sin dudas renovadas ilusiones de la mayoría de los trabajadores en sus direcciones mayoritarias, pero contiene también, de un modo más o menos consciente, la exigencia de una rectificación de la política que han seguido en el último periodo. Sin comprender este doble aspecto, no es posible utilizar esta dinámica unitaria al servicio de una línea revolucionaria de clase. Porque las direcciones reformistas van a tratar de instrumentalizar esta dinámica justamente en sentido contrario. No ha cambiado lo fundamental del contenido de sus políticas; sólo cambia la forma de llevarlas a la práctica. No cambiarán por consiguiente sus efectos nefastos, y es más necesario que nunca darles la batalla.

Este giro "unitario" de los reformistas es también una maniobra de autodefensa frente a la crisis de orientación que había expresado el 1-M y que, sólo temporalmente, ha hecho pasar a segundo plano la victoria de las EMs. Tratándose de partidos fuertemente electoralistas, es lógico, y así lo habíamos previsto, que malos resultados electorales provoquen crisis internas. Pero el problema va mucho más allá, y existen muestras de él en toda Europa: las estrategias socialdemócrata y eurocomunista, que alcanzaron su máxima credibilidad en la coyuntura ascendente de las luchas de clases europea -período 68-75- están ahora en crisis y son objeto de importantes debates y diferenciaciones internas. Las respectivas políticas de colaboración de clases aparecen ante capas amplias de trabajadores como incapaces de vencer a la burguesía y de defender cotidianamente los intereses obreros y populares. Los revolucionarios debemos intervenir a fondo en estos debates, afirmando claramente nuestra estrategia y nuestro programa y dotándolo de la inserción en las luchas de masas, de la relación de fuerzas sin la cual la crisis política reformista se zanjará con desmoralizaciones o con la recuperación por los reformistas de los sectores de izquierda que contestan su política.

6- El gran desarrollo de corrientes nacionalistas radicales es otro de los datos nuevos importantes de la actual situación. Como ya hemos señalado, cada una de estas corrientes exige un análisis específico, que precise las distintas componentes sociales y políticas que existen en la corriente y en su dirección, las tendencias de evolución que se producen en ellas y concrete, en base a esto, la táctica más adecuada. Aquí vamos a establecer solamente una caracterización general del fenómeno, que sirva de marco político para análisis más concretos: —estamos ante corrientes de masas nacionalistas radicales, con una base social de la que forman parte sectores considerables de trabajadores y con direcciones pequeñoburguesas, incoherentes, en las que coexisten diversas alas, desde las más próximas al nacionalismo burgués, a las más influyentes por posiciones obreras revolucionarias; —las causas que han motivado el crecimiento de estas corrientes son fundamentalmente las políticas de las direcciones obreras mayoritarias en general y en particular su incapacidad y cobardía para enfrentarse a la política centralista de la burguesía española, frente a estas políticas se ha producido una radicalización en la que se combinan aspectos izquierdistas y sectarios (tanto en el terreno sindical,

como, por ejemplo, en el batzarre de Herri Batasuna), con aspectos típicamente nacionalistas pequeñoburgueses (disolución del papel de la clase obrera en el "pueblo"; ausencia de respuesta a los problemas de la solidaridad de clase entre los trabajadores de todo el Estado; posiciones independentistas), con la defensa de consignas democrático-radicales y antirepresivas (algunas de ellas correctas: autodeterminación; otras erróneas; las que hacen referencia en el caso de HB al apoyo político a ETA) y con el rechazo radical de los regímenes pre-autonómicos (terreno en el cual los aciertos y los errores hay que determinarlos en concreto): este conjunto de aspectos tienen en común ser la expresión de rechazos, desde puntos de vista políticos y sociales muy diversos, de la política de consenso tal como la han sufrido las respectivas nacionalidades y son por ello mismo, el reflejo de un proceso de radicalización desorientado sometido a las contradicciones sociales y políticas señaladas antes y en condiciones de diferenciación interna. Los revolucionarios tienen que intervenir decididamente en este proceso, por medio de una adecuada política de alianzas, coherente con nuestra política de FU: La táctica concreta la definiremos en el apartado correspondiente. Es claro que la condición misma para ello es aparecer como una alternativa obrera revolucionaria, es decir, como la vanguardia del combate por la unidad de la clase y contra el reformismo, que ha conseguido ganarse a un sector significativo del movimiento obrero organizado.

7- Dentro de los partidos obreros centristas, se han producido también cambios de importancia.

La unificación de PTE-ORT va a dar lugar al partido más grande, con mucha diferencia, a la izquierda de los partidos reformistas, con una gran superioridad sobre los demás en aparato político e implantación. Pero este partido va a surgir con una crisis de su referencia internacional maoísta, con grandes tensiones internas, con una crisis de orientación y de organización sindical y, sobre todo, sin espacio político, a no ser que se produzca un cambio radical en la tendencia "neoreformista" que ambos han puesto en práctica en los últimos tiempos (orientación que, por otra parte, para poderse sostener necesita de puntos de apoyo en las instituciones con los que el nuevo partido no va a contar; no bastan los tres o cuatro concejales que tienen en capitales de provincia, ni los demás puestos municipales obtenidos, aunque hayan sido muchos más que los demás partidos a la izquierda del PCE). Aunque no entramos en una época propicia para grandes diferenciaciones políticas sí hay que esperar que este partido se vea sometido a tensiones internas permanentes, que van a hacer muy difícil su consolidación. En todo caso, PTE-ORT es incapaz de llegar a ser una alternativa frente a las direcciones reformistas; en cambio sí es capaz, y hacía falta tenerlo muy en cuenta, su activar de "pan-talla" ante muchos trabajadores que han roto con el reformismo y buscan una alternativa revolucionaria.

El proceso electoral ha producido una multiplicación de siglas, con votaciones similares y a larga distancia de los partidos anteriores. A pesar de ello, somos MC-OIC y LCR, quienes tenemos una influencia política mayor, apareciendo MC-OIC en franca ventaja respecto a nosotros. El problema en este caso se plantea en términos parecidos al período anterior: MC-OIC es nuestro competidor político más directo en la tarea de ganarse a los sectores de izquierda del movimiento de masas y el único partido importante que puede llamarse con propiedad "centrista de izquierdas" en el país. Sale de este período relativamente fortalecido y la táctica respecto a él ocupar un lugar de importancia, que definiremos en el proyecto de resolución.

Estos son, en resumen, los cambios sociales y políticos que definen la situación de "resistencia prolongada" que tiene ante sí el movimiento de masas, y en primer lugar el movimiento obrero. Un movimiento que no está, ni mucho menos, "aplastado", atomizado, sino con la combatividad y organización suficiente como para recomponer sus fuerzas y preparar la contraofensiva frente a la derecha. La ocasión para ello son las próximas luchas de conjunto en el terreno laboral, las movilizaciones que se darán sobre los estatutos, las batallas sociales y

políticas parciales y sectoriales. Es muy poco probable que se den luchas políticas centrales. Las expectativas de cambios políticos de conjunto tardarán en reaparecer. Por eso, este periodo va a ser un periodo de *preparación*, de *reforzamiento* y por ello mismo tiene que ser un periodo de *rectificación* en el cual *el crecimiento de la fuerza y la influencia política de la LCR*, cree las relaciones de fuerzas dentro del movimiento obrero que permita cuando las condiciones cambien, que el movimiento obrero lance una ofensiva contra la derecha y esta vez la venza.

RESOLUCION POLITICA

CONTRA LA DERECHA: UNIDAD, LUCHAR Y NO PACTAR

I. LA NUEVA SITUACION

1- Los acontecimientos de los últimos meses han abierto una *nueva situación política* en el país. El factor determinante de la nueva situación son las consecuencias de la victoria de la UCD en las Elecciones Generales del 1 de Marzo. Esta victoria ha fortalecido a la burguesía y a su partido hegemónico a escala estatal: la UCD; ha ampliado su iniciativa y margen de maniobra política; la ha situado en general, en mejores condiciones para abordar su crisis económica y política: en particular *la reestructuración del sistema productivo*; necesaria para iniciar un proceso de recuperación económica y para la integración en la CEE; *aunque ha empeorado su situación para la búsqueda de una salida a la cuestión nacional*, sobre todo en Euzkadi; en fin, ha hecho *desaparecer*, formalmente por un periodo de cuatro años, *las expectativas de cambios políticos globales* que existieron en toda la fase anterior.

El movimiento obrero tiene ante sí una fase de *resistencia prolongada* frente a la derecha. La experiencia, especialmente de las luchas de convenios y la victoria de la izquierda en las Elecciones Municipales, demuestran que hay combatividad y organización suficiente para afrontar la ofensiva del gobierno y la patronal y para preparar la contraofensiva frente a ellos. Para eso: habrá que *fortalecer* la unidad de los trabajadores; *reconquistar* el papel dirigente del movimiento obrero en todas las luchas contra la explotación y la opresión, especialmente las de las nacionalidades y regiones oprimidas; *basarlo todo* en la movilización unitaria de masas; y fundamentalmente *avanzar en la construcción del Partido Revolucionario*.

No entramos en una situación de calma social y política; el futuro va a estar marcado por luchas importantes, que afectarán al conjunto de los trabajadores, contra la política económica del gobierno y sus ataques a la libertad sindical y los derechos sindicales y laborales; por las luchas contra los intentos de establecer "estatutos de consenso" que nieguen la soberanía de las nacionalidades, *por la crítica situación en Euzkadi, que puede hacerse explosiva*; por la necesidad de responder a los atentados y provocaciones fascistas; por la necesidad de hacer frente a la escalada represiva del gobierno; para romper el cerco que la derecha quiere imponer a los Ayuntamientos dirigidos por la izquierda; para defender los derechos de las mujeres y de los jóvenes, etc. Pero es muy poco probable que puedan plantearse batallas políticas centrales dirigidas a *derribar el gobierno de la derecha*. Antes de que éstas lleguen, deberá pasar un periodo posiblemente largo en el que se desgaste la victoria electoral de la UCD y se fortalezca política y organizativamente el movimiento de masas, en primer lugar, el movimiento obrero.

Por todo ello, la nueva situación política debe ser caracterizada como *más estable relativamente que la situación anterior, dentro de las características generales del periodo definidas en el V congreso de la LCR*. (3)

2- La ofensiva burguesa debe tratar de realizarse pues, en condiciones de *equilibrio de clases*. La burguesía no puede lan-

zar un ataque frontal y directo contra los trabajadores, porque teme encontrar una respuesta contundente. Por eso necesita, como en el pasado, las políticas de colaboración de clases de las direcciones reformistas del PSOE y el PCE, para poder llevar adelante sus planes.

Efectivamente, la fase anterior estuvo marcada por la *política de consenso*: ella es la principal responsable de los reveses sufridos por los trabajadores: el deterioro de sus condiciones de vida, el aumento del paro, la negación o el recorte de las libertades, la desmoralización o la apatía de capas importantes obreras y populares, la pérdida del protagonismo del movimiento obrero en la lucha contra la opresión nacional, etc. Ella es también la principal responsable de la victoria de la UCD en las Elecciones Generales. A pesar de ella, gracias exclusivamente a la voluntad de los trabajadores de evitar una nueva victoria de la derecha, se consiguió vencerla en las Elecciones Municipales.

En las condiciones actuales, la burguesía *no necesita* hacer acuerdos *sistemáticos* con las direcciones reformistas. Pero *sí necesita* establecer acuerdos *concretos* en los problemas más conflictivos (por ejemplo, los estatutos de autonomía,...) y sobre todo, cuenta con que las direcciones del PSOE y el PCE *no van a plantearle seriamente la batalla*, no van a impulsar la necesaria movilización unitaria de los trabajadores y el pueblo frente a cada uno de los planes y de los actos del gobierno.

Efectivamente así es. La profunda dinámica unitaria que estalló inmediatamente después de las Elecciones Municipales espoleada por la moral recibida de la victoria, ha ejercido una fuerte presión sobre las direcciones del PSOE y el PCE, cuyo primer resultado es el pacto municipal entre ambos. Pero esa dinámica apunta mucho más lejos que la elección de alcaldes y la distribución de delegaciones municipales: en ella se expresa de un modo más o menos consciente, *la aspiración de los trabajadores a que sus direcciones mayoritarias rectifiquen la política que hasta ahora han seguido y se planteen de un modo unitario y firme la batalla contra la derecha*. Esto era justamente lo que querían decir las miles de voces que el pasado 1 de

Mayo gritaron: ¡El PSOE y el PCE unidos a vencer!

Pero ni el PSOE, ni el PCE tienen la menor voluntad de vencer: la forma de sus políticas ha cambiado; *se trata sin duda de un cambio muy importante, pero el contenido no ha cambiado*. Y es el contenido lo que en definitiva importa. Las direcciones socialdemócrata y eurocomunista van a seguir defendiendo políticas de pacto social; no quieren rectificar su nefasta orientación en las nacionalidades; no quieren hacer de los Ayuntamientos de izquierda bastiones al servicio de los trabajadores; no quieren lanzar al movimiento obrero y popular contra los fascistas,... Van a tratar solamente de controlar la presión unitaria de los trabajadores, encerrarla en los límites de la presión "responsable" sobre el gobierno y la patronal y el compromiso con ambos. Los riesgos de que se reproduzcan, y aún que se refuercen, los peores efectos de la fase anterior en las filas del movimiento obrero, son muy grandes.

Sólo hay una vía para superar estos riesgos: *apoyarse, estimular la voluntad unitaria de los trabajadores, para luchar por dirigirla en sentido contrario al que quieren los reformistas*. En esta vía estará la Liga Comunista Revolucionaria.

II. Los ejes centrales de la actividad de la LCR

3- Los principales ejes de lucha de los próximos meses son dos: sobre ellos la LCR realizará campañas centrales que concentren la actividad de propaganda y agitación de todo el partido:

A- *La lucha contra la política económica y laboral del gobierno y la patronal*.

En sus aspectos más concretos, el gobierno no ha definido aún con claridad ni el contenido de su nuevo programa económico, ni la táctica que piensa seguir para llevarlo a la práctica. Pero a pesar de ello, muchas cosas importantes están claras: con pacto social, o sin él, el gobierno pretende establecer nue-

vamente toques salariales, condición esencial para que se mantenga la mejora de los beneficios capitalistas; el gobierno y la patronal no van a realizar ningún plan contra el paro, acorde con la enorme gravedad del problema: en el mejor de los casos ampliarán su actual política de parches y además, tratarán de imponer la flexibilización de plantillas; el gobierno está dispuesto a poner en pie una legislación laboral y sindical, a la medida de los intereses patronales, con gravísimas limitaciones al derecho de huelga, ataques a la libertad sindical...; las direcciones sindicales de CC.OO. y UGT siguen defendiendo, con nombres diversos, la necesidad del pacto social, lo que incluye el compromiso con el gobierno y la patronal sobre restricciones graves a derechos fundamentales de los trabajadores.

En estas condiciones, nuestras tareas fundamentales son las siguientes:

- rechazar cualquier forma de pacto social: en los debates que sobre este tema existen ahora en el movimiento obrero, nuestra posición será que lo único que CC.OO. y UGT deben discutir con la patronal a escala de Estado es un "convenio-marco de mínimos", cuyo contenido recoja las reivindicaciones básicas de los trabajadores y trabajadoras. La táctica concreta ante las futuras negociaciones de convenios, la estableceremos en su momento.
- frente al "programa a medio plazo" que va a presentar el gobierno, CC.OO. y UGT deben levantar unitariamente un programa alternativo que contenga la salida a la crisis favorable a los trabajadores y rechace cualquier demagogia de "solidaridad nacional frente a la crisis".
- además de este programa, el problema del paro exige una respuesta unitaria y urgente del movimiento obrero. En primer lugar, hay que avanzar y consolidar las agrupaciones de parados dentro de los sindicatos, como la mejor forma de organizar a estos compañeros y compañeras y garantizar la solidaridad permanente del movimiento obrero con ellos. Por otra parte la campaña de CC.OO. sobre la consigna: "Mujer, apuntese a las listas de paradas", merece el apoyo de todos los sindicatos y partidos obreros, así como de las organizaciones de mujeres. Sobre esta base, el movimiento obrero debe levantar un plan unitario para acabar con el paro: la propuesta que, en este sentido, formuló en el mes de Febrero la LCR nos sigue pareciendo plenamente válida. La solución al problema del paro no puede dejarse en manos de los capitalistas, que "prometen" puestos de trabajo para cuando llegue la reactivación ni pactarse con ellos, admitiendo, por ejemplo, toques salariales a cambio de más "promesas" de nuevos empleos. La solidaridad que necesitan los parados de los compañeros que trabajan es la movilización y lucha conjunta, no que los que trabajan acepten una mayor explotación.
- tanto en el problema del paro, como en el conjunto de la lucha contra la política económica del gobierno, los Ayuntamientos dirigidos por la izquierda deben ocupar un lugar de primera fila. Los trabajadores deben rechazar cualquier justificación que pudieran darles los concejales y alcaldes reformistas sobre las "limitadas posibilidades" de los Ayuntamientos en este terreno. Naturalmente, si se buscan compromisos con el gobierno y se hacen concesiones sistemáticas a especuladores contratistas, etc., no habrá posibilidades de dar satisfacción a las reivindicaciones urbanas de los trabajadores. Pero apoyándose en la movilización y las organizaciones de masas, todo puede conseguirse. En particular, en lo que se refiere al paro, hay que exigir que ocupen un lugar fundamental en los planes de urgencia municipal, y en los Ayuntamientos dirigidos por la izquierda, deben ponerse en pie de forma inmediata planes conjuntos sindicatos-Ayuntamientos para dar trabajo a los parados de la zona.
- Las leyes sindicales y laborales tienen una gran importancia para el futuro del movimiento obrero. La posición del gobierno y la patronal está clara: establecer lo que llaman el "nuevo marco de relaciones laborales", que consiste en un conjunto de leyes que garantizan las necesidades patronales y la "disciplina en la empresa" (flexibilización de plantillas, etc.).

El gobierno de UCD pretende apoyarse en su relación de fuerzas parlamentarias para hacer aprobar este conjunto de leyes. CC.OO. y UGT deben reaccionar firmemente para quebarar los objetivos de la UCD y el funcionamiento de la "aritmética parlamentaria". Los criterios que la LCR defiende para conseguirlo son:

- 1- CC.OO. y UGT deben considerar que la libertad sindical no es negociable y que cualquier compromiso, a cambio de cualquier clase de "contrapartidas", que admita recortes a ella, o deje la puerta abierta a que el gobierno los realice, debe ser rechazado.
- 2- Defendemos que CC.OO. y UGT elaboren y luchen unitariamente por un Estatuto de los Derechos de los Trabajadores que reconozca la libertad sindical. Para la LCR esto va ligado a:
 - el estatuto debe tener un contenido específico basado en la libertad de organización, sindicación, huelga, negociación colectiva, no ingerencia del Estado, derechos para las secciones sindicales, comités, etc.
 - apoyaremos, en el terreno de la movilización, todos aquellos objetivos progresivos que en este terreno defiendan los sindicatos.
 - lucharemos para que todo estatuto presentado al parlamento por los partidos obreros sea previamente discutido democráticamente por las bases de las centrales sobre el conjunto de temas relacionados con la libertad sindical, poniendo en relación este debate con lo que ha sido la trayectoria y actuación de las direcciones sindicales en todo el último periodo.
 - respecto al proyecto de estatuto presentado por el PCE nuestras críticas fundamentales son:
 - debe desaparecer del estatuto cualquier referencia al artículo 28 de la Constitución, que UCD utilizará (como ha hecho ya: sanidad, militarizaciones,...) para restringir el derecho de huelga. La posición de las centrales debe ser una firme oposición a su regulación. Sólo a los trabajadores y sus organizaciones corresponde decidir las normas necesarias para el mantenimiento de los servicios imprescindibles durante la lucha.
 - es preciso introducir en el estatuto el derecho a la formación de piquetes de huelga, para hacer frente así a agresiones como el decreto de "seguridad ciudadana", así como para cerrar el paso a cualquier forma de ingerencias que limiten la libertad de acción sindical (militarizaciones,...).
 - en contra de la actual redacción de dicho proyecto, es preciso que el estatuto garantice el derecho de negociación indistintamente para comités y sindicatos, dentro y fuera de la empresa, no sólo para evitar un conflicto absurdo entre CC.OO. y UGT, sino porque es un asunto que compete a la decisión de los trabajadores y los sindicatos, en cada momento. En el mismo sentido defenderemos los plenos derechos para las secciones.
 - hay que cortar el paso explícitamente a cualquier intervención del gobierno en la negociación colectiva, mediante decretos de toques, etc, afirmando el absoluto respeto a la voluntad y autonomía de las partes.
- 3- En el curso de los debates parlamentarios y de las movilizaciones de los trabajadores en este terreno, se va a hacer cada vez más evidente la existencia de serias contradicciones entre la defensa de las libertades sindicales y los artículos de la Constitución que introdujo UCD para limitarlas. Estas contradicciones, que debemos resaltar desde hoy, deberán ser utilizadas para abordar iniciativas en el momento oportuno sobre la reforma de estos artículos de la Constitución.
- 4- Es sobre la base de estos puntos como podremos impulsar la acción de los sindicatos y profundizar los procesos de diferenciación en su seno, avanzando en el desarrollo y fortalecimiento de los sectores de la izquierda sindical.
- Para la LCR el trabajo sindical constituye la primera prioridad de su actividad de partido. Los militantes de la LCR en CC.OO. y UGT y en los demás sindicatos obreros de que forman parte, dedicarán en el próximo periodo un esfuerzo parti-

cular al fortalecimiento del sindicato en la empresa, base para la necesaria revitalización de la actividad sindical. Los puestos que nuestros militantes ocupen en el aparato sindical estarán al servicio de este trabajo. Cualquiera que sea el puesto que ocupen, los militantes de la LCR defenderán ante cada uno de los problemas que plantea la actividad sindical, las alternativas concretas de nuestro partido; tratarán de ganar para ellas la máxima adhesión, estableciendo para ello cuantos acuerdos de unidad de acción sean posibles con otros partidos y compañeros; lucharán por conseguir la mayoría en el nivel sindical o la empresa o ramo de que se trate; respetarán la disciplina sindical, sin que ello signifique ni pueda aparecer en ningún caso como apoyar posiciones que rechazamos; por el contrario, nuestra principal preocupación será que las posiciones que defendemos queden siempre muy claras ante los trabajadores: esta es la base para fortalecer la influencia política de los revolucionarios en los sindicatos y reclutar los mejores militantes para el partido.

- La LCR dedicará un gran esfuerzo de propaganda y agitación a la difusión de sus posiciones de partido en los sindicatos.

B. La lucha por el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades y por la solidaridad entre todos los trabajadores del Estado español.

En las próximas semanas va a iniciarse la negociación de los estatutos de autonomía de Catalunya y Euskadi. La LCR viene combatiendo desde hace meses ambos proyectos, que no han sido elaborados democráticamente por una institución soberana, sino mediante consenso en las respectivas Asambleas de Parlamentarios, y cuyo contenido supone una negación de la soberanía nacional. Ahora los proyectos vienen a Madrid y se pretende añadir al "consenso nacional", un nuevo "consenso estatal", buscando un compromiso con el gobierno y las Cortes centrales. A la vez, otras nacionalidades y regiones, ven amenazados sus derechos y aspiraciones: no sólo se les quiere imponer los mismos métodos antidemocráticos de elaboración estatutaria e idénticos, o aún peores, "techos constitucionales", sino que además el gobierno trata de retrasar al máximo el proceso estatutario en ellas. En fin, las amenazas de división entre los trabajadores de unos pueblos y otros son más graves que nunca.

En esta situación, la LCR realizará en todo el país una campaña política sobre las bases siguientes:

- 1- La defensa incondicional del derecho a la autodeterminación de las nacionalidades, que incluye el derecho a constituir una nación independiente, si la mayoría de sus habitantes así lo desea. La LCR no comparte estas posiciones independentistas y se enfrenta políticamente a ellas en cada nacionalidad, pero lucha porque dispongan de plena libertad para expresarse, organizarse, ..., en igualdad de condiciones con las demás posiciones.
- La defensa incondicional del derecho a la autonomía de las regiones, sin otros límites que los que quieran establecer sus habitantes y sin retrasos impuestos por el gobierno.
- 2- La solidaridad con los pueblos catalán y vasco y por su derecho a dotarse de los estatutos que deseen. Dadas las condiciones especiales de represión que sufre el pueblo vasco, la situación crítica existente en él, y la campaña reaccionaria que se viene realizando en su contra, la LCR pondrá en primer plano de la campaña la SOLIDARIDAD CON EUSKADI.
- 3- La difusión de las posiciones que la LCR defiende en Catalunya y Euskadi de rechazo a los actuales proyectos estatutarios, tal como ha sido explicado anteriormente.
- 4- La exigencia de que las Cortes centrales no realicen la menor ingerencia en los proyectos de estatutos: corresponde a cada nacionalidad o región decir la primera y la última palabra sobre los mismos.
- 5- La solidaridad entre todos los trabajadores del Estado español, base de la lucha por poner a la clase obrera al frente del combate contra la opresión nacional y regional.

III. La actividad de la LCR, en su conjunto.

Junto a estos dos ejes centrales de nuestra actividad, la LCR dedicará en el próximo periodo un gran esfuerzo a la intervención en otros dos frentes: la política municipal; la lucha contra las bandas fascistas.

A. La lucha contra el cerco de la derecha en los municipios.

Las Elecciones Municipales han supuesto una importante victoria política de los trabajadores sobre la derecha: la izquierda va a gobernar los municipios en que viven un 70 por ciento de los habitantes del país. Una potente dinámica unitaria ha sacudido el movimiento de masas, elevándole la moral y forzando el pacto municipal PSOE-PCE. Así se han creado mejores condiciones para el desarrollo de la actividad de los trabajadores. lo cual se ha expresado, en particular, por un resurgimiento de las Asociaciones de Vecinos y otras formas de organización obrera y popular en los pueblos, barrios y ciudades.

La reacción del gobierno ha sido fulminante, estableciendo un verdadero cerco sobre los Ayuntamientos gobernados por la izquierda. Ha utilizado para ello las viejas leyes franquistas aún vigentes y, como instrumentos fundamentales, las Diputaciones y los gobiernos civiles, atacando la autonomía y la democracia municipal más elementales. Al cerco político, seguirá el económico, amenazando con la asfixia de las haciendas municipales a aquellos Ayuntamientos que no se plieguen a las exigencias del gobierno y, por supuesto, de las constructoras, empresarios del transporte, intermediarios, fábricas contaminantes, empresas de autopistas, etc.

Este cerco va pues a provocar que los ayuntamientos se conviertan en un centro en que se entrecruzan las más diversas reivindicaciones populares y en un foco de conflictos sociales y políticos. Para afrontar esta situación, los gobiernos municipales de izquierda tienen que basar su actividad en la movilización de los trabajadores y los demás sectores populares. Esta es la única forma de poner realmente los Ayuntamientos al servicio de los trabajadores y no ser simples "gestores de la miseria" que defrauden las esperanzas puestas en ellos.

Pero los alcaldes y concejales del PSOE y el PCE se han apresurado a afirmar que se consideran representantes de "todos los ciudadanos", y no de los trabajadores, que son quienes les han votado; que van a evitar cualquier enfrentamiento con el gobierno y los capitalistas que hacen su negocio en la ciudad; que sólo quieren ser, en definitiva, "gestores honrados" del Ayuntamiento. Coherentemente con esta línea, han establecido en Catalunya y otros puntos del país, pactos municipales de gobierno con partidos burgueses, que la LCR rechaza y no apoyará de ninguna manera.

El movimiento obrero y popular va a hacer la experiencia de unos Ayuntamientos de izquierda, gobernados en la mayoría de los casos por los partidos reformistas. Sin duda, van a plantearse aquí conflictos importantes, cuyo desenlace va a estar determinado por el papel que desempeñen los sectores de izquierda del movimiento de masas, dentro de los ayuntamientos y fundamentalmente en las organizaciones obreras y populares: es nuestra responsabilidad luchar porque se forje una alternativa en este frente a la política reformista, sin la cual los riesgos de desmoralización y decepción en amplios sectores de masas son muy reales.

La LCR concibe la batalla en el terreno municipal dentro de la lucha global contra el gobierno y la patronal. Para nosotros las relaciones entre la acción dentro del Ayuntamiento y la movilización de masas son justamente las contrarias a las que establecen los reformistas: la base de nuestro trabajo es la movilización de masas; en ella tienen que apoyarse los concejales de izquierdas para arrancar los objetivos populares a UCD y la patronal. Así buscaremos vertebrar una amplia corriente de izquierdas, en la cual la actividad de nuestros concejales debe servir de ejemplo.

Nuestro lema será "Romper el cerco de UCD; contra el consenso en el municipio". En todos los Ayuntamientos, la izquierda debe formar bloque y actuar con un programa común,

para que los Ayuntamientos sirvan a los intereses de los trabajadores en todos los terrenos: la lucha contra la política económica del gobierno, contra la opresión centralista, contra la represión, por las libertades, etc. Con esta orientación lucharemos por la democracia y la autonomía municipal y por los planes de urgencia que atiendan las necesidades básicas de la población. **La lucha contra las bandas fascistas**

Los crímenes fascistas aumentan de día en día. El gobierno es incapaz de hacerles frente. La razón es muy clara: los fascistas cuentan con bases de apoyo en el aparato de coerción, desde la policía a los tribunales, sobran pruebas de ello. La actividad del gobierno contra los fascistas se limita a algunas detenciones simbólicas, cuando no les queda más remedio que hacerlas; en general, los fascistas cuentan con la impunidad más absoluta.

La historia ha demostrado que sólo hay un modo de hacer frente a los fascistas: la autodefensa unitaria del movimiento obrero, de sus partidos, sindicatos, organizaciones juveniles, etc. En esta vía se desarrollará la actividad de la LCR de un modo conjunto con las JCR. Otras actividades que pueden ser útiles y que apoyaremos (leyes antifascistas...) ocupan un lugar subordinado en la vía anterior.

Hemos propuesto en muchas ocasiones y desde hace mucho tiempo a todas las organizaciones obreras la necesidad de un Frente Único Antifascista. Vamos a seguir luchando por él, llevando la necesidad de su constitución a los sindicatos y las demás organizaciones obreras y populares. Pero hay que hacer más y vamos a hacerlo: hay que ponerse a organizar desde ahora a todos los partidos, organizaciones y sectores del movimiento obrero y popular que están ya hoy dispuestos a responder a las agresiones fascistas con la movilización y la autodefensa. Los pasos que empecamos a dar en este camino son la condición para que el conjunto del movimiento obrero se incorpore a esta lucha. Y, desde luego, son la condición para que objetivos como la DISOLUCIÓN DE LAS BANDAS FASCISTAS lleguen a hacerse realidad.

Además, la LCR realizará una actividad regular en los distintos movimientos y frentes de lucha sectorial, que pueden convertirse en objeto de campañas centrales de partido si la evolución de los acontecimientos lo exigiera.

e/ La lucha contra la represión y por el pleno ejercicio de las libertades

La ofensiva de la derecha lleva consigo una escalada represiva, iniciada de hecho hace meses. El decreto llamado de "seguridad ciudadana" y toda la legislación llamada "antiterrorista", la ocupación policíaca y la "guerra sucia" que bandos para policíacos, y la policía misma, libran en Euzkadi: las detenciones de pliguetes de huelga; las restricciones del derecho de manifestación y la actuación conjunta fascista-policía en la represión de manifestaciones legales... son algunas muestras de una política represiva que será cada día más dura si no se le hace frente.

La tarea más urgente es luchar por la ABOLICIÓN DEL DECRETO DE "SEGURIDAD CIUDADANA" y la restante legislación "antiterrorista", que está dirigida realmente, como afirmamos en su día, contra todos los trabajadores.

La tarea permanente es seguir reclamando la DEPURACIÓN DEL EJERCITO, LA POLICIA, LOS TRIBUNALES Y LOS FUNCIONARIOS DE PRISIONES de todos los fascistas y reaccionarios que existen en su interior.

Junto con ello, hay que defender la AMNISTIA PARA TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS, con la evidente excepción de los fascistas (que, por otra parte, suelen durar muy poco tiempo en la cárcel, como hemos podido comprobar con Lerdo de Tejada, los asaltantes a la facultad de Derecho de Madrid, o los responsables del asesinato del militante anarquista Agustín Rueta en la cárcel de Carabanchel). Esta consignas ha sido abandonada por los partidos obreros mayoritarios, que se justifican afirmando que la amnistía va se dio en el 77 y que estos presos son "terroristas". Estas excusas son indignas de partidos obreros. Como hemos repetido en muchas ocasiones criticamos radicalmente la actividad de ETA, y por supuesto más aún la de un grupo como el GRAPO que puede hacer la salvajada de poner una bomba en el local central del mayor sindicato obrero del país. Pero por duras que sean estas críticas, el movimiento obrero no puede confiar en policías, tribunales ni funcionarios de prisiones de la burguesía, infectados además de fascistas, ni darles el menor derecho a ejercer represión sobre estos grupos. Cualquier error que se cometa en este terreno, se termina volviendo contra el propio movimiento obrero. La política de las direcciones del PSOE y el PCE respecto a la represión debe ser objeto de una crítica frontal y sistemática.

Y esta posición es perfectamente compatible con la batalla política radical que debemos seguir dando frente a ETA. Nada, absolutamente nada ha ocurrido en los últimos meses que nos lleve a cambiar de opinión sobre los efectos nefastos que las acciones de ETA tienen para el movimiento obrero en su conjunto, y para los trabajadores vascos en particular. Los resultados de las Elecciones han demostrado que ETA tiene una muy amplia base social, mayor incluso que la que suponíamos. Pero la corrección de una línea política no se mide por las adhesiones populares que suscita: se mide por sus efectos subjetivos y objetivos sobre el movimiento obrero. Y estos efectos no han variado.

En fin, la LCR planteará al conjunto del movimiento obrero la necesidad de combatir cualquier restricción de las libertades democráticas y de defender unitariamente a cualquiera que sufra represión por ejercerlas. La exigencia más elemental es la ELEGALIZACIÓN INMEDIATA DE LOS PARTIDOS NACIONALISTAS RADICALES Y OBREROS que el gobierno mantiene en la ilegalidad.

d/ La lucha por los derechos de las mujeres

Las mujeres no solamente sufren de un modo particularmente grave los efectos de la crisis económica, a los que hemos respondido en puntos anteriores, sino que además ven amenazados ahora derechos democráticos básicos por la próxima ley del divorcio y por la negativa del gobierno, no combatida por los partidos obreros mayoritarios, a plantear

blación en vivienda, enseñanza, sanidad, etc. Y sobre todo, impulsaremos la organización autónoma del movimiento, potenciando las Asociaciones de Vecinos, su coordinación con los sindicatos obreros y con otros organismos (centros de mujeres, organizaciones juveniles, ecologistas, etc.) y su intervención y control sobre el conjunto de la actividad municipal.

Siempre el problema del aborto.

Todas las organizaciones de mujeres están discutiendo para tratar de presentar un proyecto de ley unitario sobre el divorcio. La LCR defiende que este proyecto se base en: — ninguna traba al divorcio por parte de la iglesia o el Estado; — sin "víctimas", ni "culpables"; — por mutuo acuerdo o a petición de uno de los cónyuges; — con costes de los trámites a cargo del Estado; — desaparición del concepto de patria potestad, introduciendo en su lugar el de responsabilidad compartida.

Puesto que creemos que el matrimonio debe ser la simple formalización administrativa de una unión voluntaria de dos personas, el fin de esta relación debe ser igualmente una formalidad administrativa. Y por que queremos este derecho para todas las mujeres, pedimos que el Estado garantice la subsistencia económica y la promoción profesional de todas aquellas mujeres que no están en condiciones de tener una independencia económica.

Creemos que estas son las bases de una ley de divorcio justa, que podría encontrar el apoyo de la inmensa mayoría del movimiento obrero.

Además, hay que mantener la lucha por la legalización del aborto, gratuito, a cargo de la Seguridad Social, a petición únicamente de la propia mujer, sin discriminación de edad, ni de Estado civil. La campaña iniciada internacionalmente con la jornada del día 31 de Marzo ha dado unos resultados esperanzadores, pero aún sólo ha tenido eco en una franja reducida de mujeres. Hay que proseguir para lograr que ésta sea una lucha de masas. Y hay que exigir desde ella que los parlamentarios de los partidos obreros no colaboren con su silencio a que el gobierno de la derecha mantenga el aborto en la ilegalidad.

e/ La lucha junto con las JCR por los derechos de la juventud

Las movilizaciones de bachilleres y en escuelas de formación profesional han supuesto un importante impulso de las luchas de los movimientos juveniles. Este es un hecho que hay que saludar con alegría por el importante papel que corresponde a la juventud, en especial a la juventud trabajadora en el fortalecimiento del movimiento obrero y de las posiciones revolucionarias en él. La LCR dedicará todo el esfuerzo posible a estrechar las relaciones con las JCR, prestando la máxima ayuda para colaborar a hacer de ellas la vanguardia comunista de las luchas juveniles contra la miseria material y moral del capitalismo.

La LCR buscará la acción conjunta con las JCR, particularmente en la lucha antifascista, y en todos aquellos movimientos que tienen una componente fundamental juvenil (ecologista, enseñanza...).

f/ La lucha contra el imperialismo y por la IV Internacional

En la actual campaña de las Elecciones Europeas, la LCR buscará propagar al máximo las posiciones de la IV Internacional, que van a constituir la única voz ant imperialista e internacionalista que va a escucharse en el Europa de los tróv.

Pero a la vez, esta misma campaña debe iniciar un imprescindible relanzamiento de la actividad ant imperialista de la LCR contra nuestra propia burguesía: defendiendo nuestro rechazo a la entrada en la OTAN y la CEE; denunciando el papel de gendarme imperialista que la burguesía española quiere jugar en el Norte de África; reclamando la devolución inmediata e incondicional de Ceuta y Melilla a Marruecos, siendo responsable del Estado español garantizar los derechos sociales de los habitantes españoles de ambos territorios coloniales, cuando regresen al país.

La LCR dedicará la máxima atención a la difusión del periódico de nuestra Internacional, INPRECOR, y en general a la difusión de las posiciones de la IV sobre los temas fundamentales de la política internacional actual.

Con ocasión del centenario del nacimiento de Leon Trotsky, que tendrá lugar el próximo noviembre, la LCR organizará actos públicos de la máxima audiencia posible, tratando de difundir ante el movimiento obrero de nuestro país la inmensa obra de uno de los militantes comunistas que encarnan el honor y el genio de nuestra clase.

g/ Nuestra intervención en otros sectores

Con una adecuada distribución de fuerzas, la LCR tratará de intervenir en todos los sectores en que surge la rebelión contra el capitalismo, llevando siempre en ellos nuestro programa y nuestras alternativas concretas y de incorporación a la lucha por la unidad y la independencia de clase del movimiento obrero. Así haremos entre los soldados, trabajadores de uniforme que ven negados sus derechos democráticos más elementales; en el movimiento ecológico, que crece paralelamente a la conciencia de amplios sectores sobre la destrucción del medio ambiente que está provocando la irracionalidad capitalista; en el movimiento homosexual, que recoge a una de las capas más oprimidas de la sociedad, etc.

IV. CONTRA LA DERECHA: UNIDAD, LUCHAR Y NO PACTAR

El conjunto de la intervención de la LCR se realizará de acuerdo con nuestra política de Frente único e independencia de clase, cuya necesidad es mayor que nunca en las circunstancias actuales.

La nueva situación política exige que tengamos especialmente en cuenta los datos siguientes a la hora de concretar esta política:

15'-Ptas

VINTE DE PAGINA (12)

• El fortalecimiento de la dinámica unitaria del movimiento obrero y los efectos que ello ha producido en cuanto a la unidad de acción CC.OO.-UGT y en el pacto municipal PSOE-PCE. A pesar de que estos acuerdos no deben confundirse con una línea sistemática de unidad de acción de los partidos mayoritarios, como ellos mismos se encargan de recordar todos los días y como su propia práctica (p. ej. en las nacionalidades) demuestra, es evidente que la mayoría de los trabajadores van a considerar que esta es la vía para avanzar hacia la "unidad de la izquierda" y han depositado fuertes ilusiones en ella. La LCR debe apoyarse sistemáticamente en esta dinámica unitaria y utilizarla para combatir la política reformista: esta es la base misma del FU. La actual situación política exige que prestemos una especial atención a:

- destacar el contenido político de nuestras propuestas de unidad de acción, evitando riesgos "unitaristas" que serían instrumentalizados fácilmente por las direcciones mayoritarias;
- mantener con absoluta claridad a lo largo de todo el proceso, tanto si se logra la unidad de acción, como si no, las posiciones políticas defendidas por nuestro partido, sin que ello signifique el menor obstáculo a la movilización unitaria de masas, pero sin importarnos ir "contra la corriente" cuantas veces sea preciso hacerlo;
- apoyar decididamente cada paso adelante práctico que las direcciones reformistas den contra la burguesía, pero combatir implacablemente todo aquello que entra de lleno en la política de colaboración de clases, aunque aparezca con un lenguaje "radical", "de oposición";
- dotarnos en cada caso de la táctica precisa para ganar la máxima relación de fuerzas posible de nuestras propuestas frente a los reformistas, por medio de la unidad de acción con otros partidos obreros y apoyándonos en sectores de masas dispuestos a movilizarse y luchar. La combinación que siempre debe existir en esta táctica entre las iniciativas del partido, nuestra propaganda y agitación, los emplazamientos a las direcciones reformistas, etc., es algo que deberemos determinar en concreto, analizando el estado del conjunto del movimiento, las diferenciaciones que se producen en su interior, etc., y buscando siempre el avance de las posiciones revolucionarias que defendemos entre los trabajadores y el fortalecimiento de nuestro partido, que es en última instancia la función fundamental de la política de FU y la condición para que se realice plenamente el Frente Único Obrero.

• Respecto a la política unitaria con partidos centristas, especialmente MC-OJC, tenemos que reafirmarla, dándole un contenido esencialmente práctico -acuerdos en los distintos sectores y ante los temas centrales de actualidad política para la acción conjunta- y teniendo en cuenta que tanto el ya tradicional sectarismo de este partido hacia nosotros, como el refuerzo que éste ha recibido de sus mejores resultados electorales, hacen poco probable que esta unidad se consiga sin afirmar, en cada caso concreto y en general, nuestra relación de fuerzas respecto a ellos. Nuestra capacidad de iniciativa cumple en este sentido un papel esencial.

• El desarrollo de corrientes nacionalistas radicales bajo dirección pequeño burguesa, plantea problemas específicos de intervención. Es claro que debemos dotarnos de una política unitaria respecto a estas corrientes, que sea coherente con nuestra política de Frente Único Obrero y que nos lleve a permitir poner al servicio de esta política los sectores radicalizados obreros y pequeño burgueses que están dentro de ellas. Evidentemente, la primera condición para esta política unitaria es que exista siempre una delimitación política y programática muy clara con las direcciones pequeño burguesas de estas corrientes. Pero sobre esta base es preciso buscar cuanto de acuerdos de unidad de acción sean posibles, sobre consignas que respondan a las necesidades del conjunto del movimiento o, por emplear la fórmula clásica, a la situación objetiva y al nivel de conciencia de las masas. Es claro que en muchos casos estos acuerdos contarán con la oposición frontal de las direcciones reformistas: si el acuerdo está realizado sobre bases políticas correctas, esta oposición sólo supone que deberemos acentuar nuestra exigencia de que se incorporen a él y nuestras críticas por no hacerlo. Es claro igualmente, que encontraremos muchas dificultades para que acuerdos con las corrientes nacionalistas radicales no contengan una posición sectaria respecto a las direcciones reformistas y, de hecho, ante la mayoría del movimiento obrero organizado, nosotros lucharemos contra estos errores y nunca apareceremos comprometidos en ellos.

Nuestro doble objetivo es, en definitiva, aparecer ante estas corrientes con claridad como un partido obrero revolucionario que lucha por arrebatarse a la mayoría del movimiento obrero de la influencia de las direcciones reformistas, y demostrar también, ante sectores de trabajadores y de la pequeña burguesía que encuentran en estas corrientes una respuesta a su radicalización, a su voluntad de luchar contra la opresión nacional, que nosotros somos los más decididos luchadores contra esta opresión, que estamos dispuestos a luchar junto con ellos para combatirla, que la vía para ello es poner a la clase obrera a la cabeza del combate y que vamos a convencerlos para que se incorporen a esta tarea.

Finalmente, la prioridad de las prioridades es, más que nunca, construir el PR, fortalecer la LCR. Esto supone que demos una importancia mayor que en el pasado a las tareas de propaganda de nuestro programa de acción, no como una simple actividad literaria, sino como una ayuda imprescindible para nuestra intervención y para el reclutamiento. Y esto supone también, evidentemente, que llevemos a la práctica todas las decisiones que adoptemos en el terreno de la organización. Porque necesitamos una LCR más fuerte política y organizativamente. Porque, sin el menor subjetivismo ni voluntad de autoproclamación, esta es una necesidad del movimiento obrero del Estado español. Tenemos que confiar más en nosotros mismos y que se nos note. Sólo así conseguiremos ganarnos la confianza de la vanguardia del movimiento obrero.